V. EXPEDIENTE D-11956 - SENTENCIA C-045/18 (Mayo 16)
M.P. José Fernando Reyes Cuartas

LEY 1421 DE 2010

(Diciembre 21)

Por medio de la cual se prorroga la Ley 419 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006

ARTÍCULO 8o. APORTES VOLUNTARIOS A LOS FONDOS-CUENTA TERRITORIALES. Los departamentos y municipios podrán aportar recursos propios o recibir donaciones de particulares destinadas a propiciar y garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana, cuando así se haya previsto en el presupuesto del departamento o municipio.

Los departamentos y municipios podrán imponer tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos-cuenta territoriales de seguridad para fomentar la seguridad ciudadana.

PARÁGRAFO. Los comités territoriales de orden público aprobarán y efectuarán el seguimiento a la destinación de los recursos que se reciban por concepto de aportes de particulares para proyectos y programas específicos de seguridad y convivencia ciudadana, así como las partidas especiales que destinen a estos los gobernadores y alcaldes.

Los Alcaldes y Gobernadores deberán presentar al Ministerio del Interior y de Justicia informes anuales con la ejecución presupuestal de los respectivos fondos-cuentas territoriales de seguridad.

El inciso segundo del presente artículo no estará sometido a la vigencia de la prórroga establecida mediante la presente ley, sino que conservará un carácter permanente.

2. Decisión

Primero. LEVANTAR la suspensión de términos decretada dentro del presente proceso mediante el Auto 305 de 21 de junio de 2017.

Segundo. INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del inciso segundo del artículo 8º de la Ley 1421 de 2010 "*Por medio de la cual se prorroga la Ley 419 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006*", por ineptitud sustantiva de la demanda.

3. Síntesis de los fundamentos

Según el actor, el inciso acusado es contrario al carácter finalista del Estado y a los principios de igualdad y de justicia y equidad tributaria, ya que al facultar a los entes territoriales para imponer tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar la seguridad ciudadana, le otorga el tratamiento de servicio público, sufragado por el contribuyente por su propia iniciativa, dejando por fuera a quienes no estén en condiciones de financiarlo. A su juicio, la seguridad es un deber constitucional y legal a cargo del Estado, no un servicio público susceptible de beneficiar a quienes pagan por él. Agregó que el legislador omitió fijar directamente los sujetos activos y pasivos, el hecho generador, la base gravable y las tarifas de la tasa o sobretasa especial a crear por parte de los municipios o departamentos.

Para la Corporación, el accionante no construyó el cargo en debida forma, ya que no argumentó suficientemente su pretensión y partió de una interpretación subjetiva de la norma, que no se inserta en su contenido, al suponer que la seguridad ciudadana, como parte del orden público, se refiere a la presencia de fuerza pública en el territorio nacional

para asegurarle a sus habitantes la vida, honra, integridad, bienes y demás libertades. Empero, pierde de vista que al acudir a la expresión "*seguridad ciudadana*", el legislador no se refería únicamente a la presencia de militares y policías en las regiones, sino al fortalecimiento de las condiciones de seguridad en los territorios a través de las distintas políticas y a la consolidación de la democracia y la protección de derechos humanos para contribuir y garantizar la convivencia pacífica de los asociados.

Así mismo, encontró la Corte que la demanda es abiertamente indeterminada, al invocar como infringidos el preámbulo y los artículos 1.º, 2.º, 13, 95, 150-12, 216, 217, 218, 287, 300-4, 313, 338 y 363 del texto superior, limitándose a transcribirlos sin expresar razones directas, concretas y determinadas que expliquen por qué debe ser declarado inexecutable.

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Vicepresidenta